

Salinas de Gortari: ¿el discurso político de la modernidad?

Víctor Alarcón Olguín
Francisco Miranda López

Introducción

El discurso de la modernidad vuelve ahora a ocupar un lugar importante dentro de las preocupaciones intelectuales, económicas y político-ideológicas del mundo contemporáneo. La recurrencia de tal discurso aparece como alternativa ante los desequilibrios y deficiencias que, con ritmo e intensidades diferentes, afectan a la mayoría de las estructuras nacionales del presente histórico. Sin embargo, la unidad del discurso de la modernidad, característica de los momentos en que las naciones accedían al influjo racionalizador, ahora se ve permeado por un conjunto de significados difusos cuya impronta depende de las peculiares circunstancias en que el desencanto del progreso y del camino "hacia mejor" han surtido efecto.¹

El discurso de la modernidad adquiere, por lo tanto, signos diferentes en cada formación social acorde a las particularidades del proyecto de cambio social que se enarbole. Lo que otrora fuera la denominación por excelencia de ciertos procesos objetivos de transformación se convierte, actualmente, en mecanismo reactivador de realidades en crisis. Vale decir, en un recurso que permita conducir el cambio social hacia horizontes definidos en los que pueda resurgir una nueva identidad social que permita probar, objetivamente, la vigencia de los principios

¹ La polémica inicial en torno a los problemas de la modernidad tiene sus raíces en la década de los 70. El punto nodal de discusión centralmente abarca a las sociedades industrializadas, utilizando la categoría *posmodernidad* como supuesto histórico que permite dar cuenta de los nuevos procesos ulteriores a la modernidad. Para una revisión de estos planteamientos y de las características del debate actual véase Farfán, Rafael. "Habermas-Foucault: dos diagnósticos de la modernidad" en *Revista Sociológica (la otra cara del poder)*. UAM-AZC. Núm. 6, año 3, primavera 1988, pp. 85-110.

fundamentales de la modernidad² ante los ojos de colectividades a veces "arrepentidas", a veces frustradas e, inclusive, decepcionadas de los frutos de un progreso que finiquitó su incesante camino ascendente en una inflexión tendencialmente abismal.

Para América Latina y México la modernidad es ahora alternativa a la situación constante de desequilibrio que en los últimos años, al abrigo de las políticas desarrollistas, han caracterizado su situación económico-social. Las vivencias de la modernidad de los países como México, fueron, propiamente —como decía Baudelaire— transitorias, fugaces y contingentes, sin que alguna vez pudiera reflejarse un efecto positivo perdurable. Ello implicó que el horizonte del futuro se extraviara en una búsqueda recurrente de salidas a una casi proverbial situación inestable. ". . . No es que no hubiese habido cambios; los hubo y muchos de ellos radicales. Pero eran —para usar términos historiográficos— más eventos que procesos. Viviremos hasta hoy y de modo cada vez más dramático el tiempo como secuencia de acontecimientos, de coyunturas, que no alcanzan a cristalizar en una (duración), es decir, un periodo estructurado de pasado, presente y futuro. Vivimos un *presente continuo*".³

Darle continuidad al presente es el propósito esperanzador del "nuevo discurso" de la moderni-

² Habermas ha precisado cuatro principios básicos que han sido la herencia universal de la modernidad al mundo contemporáneo y, por ello, constituyen la base irrenunciable de toda propuesta de cambio social. Estos principios son: el derecho al individualismo, el derecho a la crítica, el derecho a la autonomía y el derecho a la autoconcepción del proceso histórico. Cfr. Galván. "Una entrevista con Luduri y Nagl (Universidad de Viena)" en *Revista Sociológica*. *op. cit.*, pp. 193-199.

³ Lechner, Norbert. "El presente continuo" en *Nexos*, Núm. 118, octubre 1987. México, p. 51.

dad que en México se ha venido formulando desde las élites gobernantes a fin de actualizar las potencialidades sociales, algunas caídas en la incertidumbre, otras, en los inicios de la rebelión ante estructuras consagradas en el pasado que ahora muestran síntomas claros de ineficacia. El proyecto de la modernidad en México, ciertamente, al proponer el cambio social, conjuga de manera peculiar las bases constitutivas del Estado Nacional con una propuesta hacia el futuro. En ello radica el principio de legitimidad que es necesario conformar para sustentar como una "necesidad histórica", ineluctable, en la que es necesario procurar "cambios irreversibles" que hagan realidad lo prometido. Así establecida, la modernidad asume los rasgos de ". . . una política instrumental, referida a un objetivo predeterminado y, por tanto, ciega a la producción y selección de diferentes opciones".⁴

De esta forma, el proyecto de la modernidad ha sido planteado, desde la última década, en el marco de una connotación unívoca. Pero a la fecha los estragos han sido mayores que los beneficios, lo que ha generado una protesta social que avanza trastocando el régimen político.

En esas circunstancias, y particularmente en la coyuntura de cambio de gobierno, la élite gobernante tuvo que rearticular el discurso matizando en diversas formas la propuesta de modernidad. Esos son los matices formulados por el candidato del partido oficial a la presidencia de la República, hoy presunto candidato electo. Condensado en un amplio discurso político, el proyecto de la modernidad, en Salinas de Gortari, viene secundado por un eje activador de lo social: la política moderna. Ella se convierte en el nuevo epicentro de las trans-

⁴ *Ibid.*, p. 46.

formaciones nacionales. Fundamentalmente, se trata de renovar los procedimientos de la política a fin de "adaptarlos" a las exigencias del cambio social, para "transformar a México pacíficamente y de acuerdo con nuestros principios".

La tesis planteada, tanto por el estilo como por la posición de poder desde donde se formula, adquiere una gran importancia, pues de ella habrá de depender, en el corto y mediano plazos, el futuro de nación. Por ello su reflexión y análisis son inaplazables. Nosotros emprendemos aquí una primera aproximación, cuyo propósito es encuadrar los contenidos y alcances del discurso de la modernidad, resaltando las "informaciones, valoraciones, sistematizaciones y motivaciones", con que se plantea por la actual fórmula política del partido gobernante.

1. El contexto reciente del sistema político

Dentro de las características históricas que han identificado al Estado mexicano, había resaltado la unidad monolítica del discurso político emanado de las estructuras del poder. Alimentado desde sus dos vertientes más importantes: la burocracia administrativa, así como de la consistente organización partidario-corporativa que sintetizaba al Partido Revolucionario Institucional, las fuentes ideológicas y los contenidos programáticos de las propuestas de los candidatos presidenciales lanzados bajo el amparo del legado de la Revolución Mexicana, en muy poco habían tenido que esforzarse para que sus propuestas fuesen aceptadas dentro del medio social.

Los nuevos escenarios producidos a partir de la década de los ochenta, han cercado los márgenes

de maniobra que la cultura discursiva del PRI y la burocracia gobernante mantenían dentro y fuera de sí mismas. La dilapidación económica, así como la inmovilidad de los mecanismos de negociación, no obstante los esfuerzos neopopulistas emprendidos por las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo, abrieron el terreno político para la introducción de virajes radicales en la composición de los principios básicos en que se sustentaba el Estado mexicano, con objeto de encontrar soluciones inmediatas a estos signos ominosos que comenzaron a anticipar los vientos del cambio en la cultura y el discurso político nacionales.⁵

Los diagnósticos para atacar la necesidad de la recomposición estructural del sistema han sido, con la gestión de Miguel de la Madrid, una apuesta de doble filo que no encontraron eco dentro del gobierno ni en las élites corporativas, sino que paradójicamente catapultaron a un primer plano sus contradicciones antidemocráticas internas. En primer lugar, porque el discurso y las acciones políticas ciertamente renovaron y rompieron con los nudos de concertación y cooptación entre gobierno y partido; por otra parte definió nuevas perspectivas respecto al manejo y rectoría económica del Estado, al redimensionar los beneficios del sistema a una sociedad civil-empresarial eficiente, sin tomar en cuenta su vinculación nacional, en aras de que el ajuste externo, los marcos de creación inmediata de empleos y la modernización del aparato productivo podrían ser razones suficientes para garantizar la estabilidad y la introducción paulatina de mecanismos políticos capaces de romper el anquilosado

⁵ Vid. Como un trabajo sintomático de esta perspectiva, López Villafañe, Víctor, "Los presidentes frente a la crisis del Estado: 1964-1986", México Cide, mimeo, 1987, pp. 32.

corporativismo. El intento democrático topó una pared que condicionaba e incluso requería de su exclusión para hacer funcionar los resortes de la propuesta modernizadora abierta por el actual régimen y que ahora es adoptada como compromiso de continuidad por el candidato presidencial Carlos Salinas de Gortari.⁶

Los quiebres objetivos de la modalidad de crecimiento económico seguido así como las estrategias de recuperación ejecutadas, han redimensionado los espacios de inserción política predominantes que, a la postre, acrecientan los signos de ineficiencia productiva y de ineficacia social. Paralelamente, la nueva dinámica interna de reivindicación encuentra topes estructurales en el esquema de centralización política, viéndose éste atravesado por tres lógicas de presión política mutuamente interconectadas.

En primer lugar, la demanda de los sectores insertados predominantemente en los patrones de crecimiento —sectores modernos de la industria, la agricultura y los servicios fuertemente coligados con la actividad económica del Estado—, que en el contexto de la crisis económica muestran en principio, signos de desarticulación interna frente a las opciones de recuperación en el marco de las realidades económicas, tecnológicas y financieras de la economía mundial. En esa situación de exacerbación de la escasez de la viabilidad de la acumulación de capital, la demanda política se concentra en la crítica al intervencionismo estatal con el propósito de desactivar el patrón de su expansión y liberar sus

instancias de control económico, a fin de disponerlas en una nueva lógica de mercado regida por la libre concurrencia de las fuerzas privadas. Esta lógica de cuestionamiento político lleva, asimismo, hacia la resolución de los problemas del endeudamiento externo, la crisis fiscal del Estado y de la recesión económica por la vía del saneamiento de las finanzas públicas a través del recorte del gasto social y la inversión del Estado paralelamente a acciones de contención al salario.⁷

La crítica al intervencionismo estatal, soporte político de los grupos empresariales, adquiere resonancia también bajo nuevos planteamientos ideológicos que demandan independencia del régimen político posrevolucionario y opción de acceso al poder institucionalizado por la vía de instancias organizativas propias. Dicho planteamiento se ve secundado por los sectores medios que, insertos en la lógica económica de la modernización, reclaman participación y democracia, recuperando el esquema reivindicativo de la liberación del mercado y del poder como espacio susceptible a la valorización de sus vocaciones y expectativas personales. En su conjunto, empresarios y sectores medios, comienzan a elaborar una nueva convocatoria social de los sectores modernos cuyo impacto regional, principalmente en el norte de la República, constituye un foco de competencia política altamente problemática para el Estado.⁸

En segundo lugar, debe advertirse que, por efecto de las resoluciones tomadas por el Estado

⁶ Críticas agudas sobre este hecho controversial en Reyes Heróles, Federico. "Sencillez de la democracia" en *Vuelta*, México, núm. 140, julio 1988, pp. 26-30; y en Labra, Armando. "Desarrollo Económico y Democracia Política" en *Economía Informa*, México, UNAM-Fac. Economía, núm. 164, mayo, 1988, pp. 11-17.

⁷ Para ampliar este diagnóstico, cfr. Labra, Armando. *Para entender la economía mexicana*. México, UNAM-Fac. Economía, 1987, pp. 17 y s.s.

⁸ Vid. Villa Aguilera, Manuel. *¿A quién le interesa la democracia en México?* México, Coed. Miguel Ángel Porrúa-UNAM, 1988, pp. 121 y ss.

ante la crisis económica —desmantelamiento de las empresas públicas, restricción a los subsidios económicos, limitación del gasto social y salarial—, los sectores subordinados al patrón de crecimiento comienzan a observar una imposibilidad real de reproducción, desdibujándose con ello, los puntos de negociación tradicionales entre el Estado y las cúpulas de representación obreras y campesinas. El proyecto modernizador no sólo atenta contra la disminución objetiva de las condiciones de existencia de los trabajadores, sino que también comienza a golpear, fuertemente, la lógica de los intereses corporativos, toda vez que se restringen los espacios de la canonjía y el subsidio, amén del cuestionamiento al estilo político de negociación de los líderes, quienes tradicionalmente, habían tenido una fuerza de presión y concesión por el monopolio más o menos legítimo de la representación política.⁹ Existen, al menos, dos frentes de acción por los que el liderazgo político cupular se ve desarticulado. Por una parte, la imposibilidad de responder a las demandas de sus agremiados debido a las restricciones impuestas por el Estado, lo cual conlleva a una situación de crisis de eficacia de los aparatos corporativos, lo que produce déficits internos de legitimación. Con ello, los aparatos corporativos pierden fuerza ante las estrategias de desarticulación diseñadas por el Estado, quien al encontrar fraccionadas las instancias de representación centraliza paulatinamente las decisiones. Por otra parte, la lucha social de los grupos subordinados que no encuentran lugar dentro de los espacios corporativos (salen de ellos por su incapacidad de responder objetivamente a las demandas; movimiento obrero

y campesino independientes, por ejemplo); constituye una fuente de crítica importante que produce en forma reiterada, nuevos espacios sociales de cuestionamiento estatal proclives a la negociación, a partir del otorgamiento real de *concesiones* o de alianzas, no necesariamente articuladas, con partidos de “oposición”. Los movimientos urbano-populares, las coaliciones de ejidos, las juntas de vecinos, los comités de mujeres, las bandas juveniles, los comités de defensa popular, las luchas municipales, entre otros, son claros ejemplos de la expresión social de las clases subalternas que, aun con “identidades restringidas”, constituyen actores sociales con una proyección política importante, en la medida que representan un reservorio de fuerzas potencialmente asimilables en el marco de las reestructuraciones propias del sistema económico-social.¹⁰

Finalmente, la tercer lógica de presión política que, a nuestro juicio, ocupa un lugar importante en los momentos actuales tiene que ver con las *fracturas internas de la clase política*. El carácter de las presiones expresadas por los grupos predominantemente insertados como por los grupos subordinados al patrón de crecimiento económico-social, se traduce en una matriz conflictiva al interior de los aparatos de dominación y organización de la “familia revolucionaria”. A la exclusión política propia de los mecanismos formales e informales que por la vía del PRI se asumían como opción legítima para llegar al poder, se suma ahora un factor adicional de exclusión derivado de la necesidad de centralizar el poder a fin de otorgar coherencia al proyecto modernizador asentado en la incorporación de la economía nacional a los patrones internacionales

⁹ Gilly, Adolfo. “La otra modernidad” en *Nexos*, México, núm. 124 (abril, 1988), pp. 29-35.

¹⁰ Vid. Loaeza, Soledad. “Desigualdad y democracia” en *Nexos*, México, núm. 123, marzo 1988, pp. 33-38.

de acumulación de capital. Este fenómeno ha provocado una variación importante de las fuentes de reclutamiento de la clase política, ahora cimentadas en las esferas de la administración pública más que en los espacios de representación popular. Este doble proceso de exclusión se ve exacerbado por el choque con proyectos ideológicos inspirados en la tradición nacionalista revolucionaria que proporcionó al Estado mexicano moderno, en sus etapas constitutivas, una extraordinaria veta de legitimación, sobre todo en los principios de soberanía nacional, de Estado popular-democrático y de beneficio social mayoritario.¹¹

La doble exclusión y el debate ideológico han generado un fenómeno de escisión interna dentro del partido en el poder y de los aparatos de gobierno. La respuesta planteada por los "políticos dominantes", directamente dependiente de las decisiones del ejecutivo y con muestras de una extraordinaria "disciplina" autoritaria, fue la expulsión de los supuestos detractores, produciéndose con ello, una reestructuración externa al partido dominante, recogiendo la disidencia interna y utilizando como soporte la tradicional infraestructura partidaria de apoyo al PRI (PPS, PARM, PST y PFCRN), conformando un frente alternativo de disputa política.

El frente alternativo representado por Cuauhtémoc Cárdenas, independientemente de los procesos que le dieron origen, adquiere un alto significado en el contexto de las presiones políticas sobre el esquema de centralización, particularmente de aquellas provenientes de los sectores subalternos. El

¹¹ Dos perspectivas interesantes en Garrido, Luis Javier. "Un partido sin militantes", en Loeza, S. y Segovia, R. *La vida política mexicana en la crisis*. México. El Colegio de México 1987. pp. 61-76; y en González Guevara, Rodolfo. "Para cambiar al PRI" en *Nexos*. México, núm. 122, febrero 1988. pp. 7-8.

frente cardenista parece encontrarse, de este modo, en una coyuntura donde se entrecruzan "coincidencias y eslabonamientos" de las presiones políticas de fuerte contenido popular. Este proceso, está inaugurando las bases de una importante competencia política.¹²

En estas circunstancias, paradójicamente, surge un receptor del nuevo curso político que puede ser ahora viable, conforme los espacios de la crisis se ensancharon y la capacidad de control interno gubernamental se estrechó, a partir del fortalecimiento del movimiento opositor, donde los partidos de izquierda como de derecha postelectoral capturan como demanda inmediata, el surgimiento de un cambio simultáneo de prioridades entre política y economía. La izquierda interpretando que una nueva política ciertamente pasa por la ruptura de las prácticas viciadas y corruptas dentro del partido y el gobierno (fraude electoral, por ejemplo) pero que ello no debe ocultar el carácter desnacionalizador y monopolístico que esto ha implicado para la economía nacional, acercándonos más que en ningún otro periodo del México posrevolucionario, hacia la supervisión hegemónica de los Estados Unidos (no declaración de moratoria). En el otro sentido, la opción civilista-neoliberal apela a que la democracia debía abrir efectivamente canales de renovación pública, sin demeritar las responsabilidades del Estado, pero que debía promover armónicamente una economía nacional, libre de trabas excesivas impuestas por la burocracia.¹³

De esta manera, durante esta coyuntura el

¹² Vid. Segovia, Rafael. "Las plataformas electorales" en *Nexos*. México, núm. 126, junio 1988. pp. 35-38.

¹³ De entre las primeras lecturas postelectorales que van en tal sentido, destacan las de Aguilar Camín, Héctor. "La reforma de los electores" en *Cuadernos de Nexos*, núm. 1. México, agosto 1988.

discurso político oficial se ha erosionado de tal forma, que ciertamente resulta difícil hablar de un proyecto unitario, coherente y racional por el que el aparato gobernante puede hoy identificarse de cara a la sociedad mexicana. Es decir, dentro de las características que podríamos identificar dentro de todo discurso político para que pueda ser eficaz en un futuro, conviene resaltar lo siguiente:

a) Los años ochenta han sido un periodo de enorme disparidad en lo que se refiere al ejercicio de la libertad de expresión. Mientras que prevalecen prácticas arcaicas de represión e intimidación en regiones rurales, los medios urbanos han transitado con gran celeridad hacia ámbitos de debate partidario, aunque todavía tenues en lo relativo a inquirir explicaciones y denuncias sobre ejercicios arbitrarios del poder.

b) Al mismo tiempo, las fracturas existentes en las élites gobernantes han obligado a cuestionar los términos y condiciones en las cuales, el pacto histórico fundacional del Estado debe ser reconstituido, ante el grado evidente de descomposición organizativa al que se ha llegado. No hay posibilidad de establecer una concordancia entre el discurso y los hechos. Por ende, la credibilidad, fuente básica para calificar de legítimo o no el uso del discurso político como expresión de poder, tiene hoy que pasar por los filtros de falibilidad, renovación, o en su caso, de una destrucción total del mismo, sustituyéndolo por otro.

En este sentido, el discurso político no puede seguir enclaustrado dentro de un propósito de mera obtención del consenso entendido como neutralización e inmovilización de los flujos de opinión y acción societales. El marco político y económico que han enraizado a partir de la crisis no admite prórroga alguna: de los discursos de las identidades restringidas deberá surgir el discurso de la integración tolerante y diversa. En este contexto, las elecciones presidenciales de 1988 se convierten en la principal prueba de fuego para encontrar desde diversas posturas, pero sobre todo para el PRI, en tanto partido gobernante, a este nuevo proyecto de viabilidad que pueda ser capaz de combinar racionalidad, coherencia ideológica e instrumentalidad técnica eficaz, con las fuentes históricas de nacionalidad, aceptación popular y organización social que recorren al sistema político.

2. Los retos y propuestas del discurso político de la modernidad

Es de sobra conocido que dentro de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari se destacaron cuatro puntos de inflexión central, los cuales involucraron al núcleo de la propuesta discursiva que ha sido ofrecida por el Partido Revolucionario Institucional durante este proceso electoral. Así, durante febrero y mayo de 1988, Carlos Salinas de Gortari pronunció cuatro discursos donde fueron reconocidos desde su óptica los principales retos nacionales: el reto de la soberanía (Cuatro Ciénegas, Coahuila); el reto de la democracia (Ciudad de Puebla); el reto social (Chalco, Edo. de México), y el reto económico (San Pedro Garza García, Nuevo León).

pp. IX-XI; y la de Sánchez Susarrey, Jaime. "El 6 de julio" en *Vuelta*, México, núm. 141. agosto 1988. pp. 62-63.

En cada uno de ellos, la propuesta de la modernidad y el cambio pretendieron explorar las viabilidades y obstáculos contenidos para los propósitos programáticos que han sido perseguidos durante la presente administración y que esperarán ser ahondados durante su gestión por parte de Salinas de Gortari. A continuación expondremos muy sucintamente la esencia de cada uno de los mismos, para indicar con posterioridad, algunas reflexiones respecto a las limitantes que una alternativa como la de Salinas representará para la propia estabilidad y legitimidad del sistema político en caso de no cumplirse con los ofrecimientos hechos por él y su partido hacia la ciudadanía.

El reto de la soberanía

La legitimidad del sistema y su estabilidad no sólo parecen ser un problema de índole interna. El incremento de los factores de intervención y de introducción de políticas hegemónicas externas revelan para México, necesidades de reconocer que su seguridad nacional y el ejercicio de su soberanía política también deberán someterse a modificaciones discursivas y estructurales de fondo. Es en tal sentido que la propuesta salinista se concentra en proponer una política exterior activa, defensiva y apegada a los principios históricos consagrados en forma reciente dentro de la Constitución Política en su artículo 89.

El concepto de soberanía inicialmente connota para Salinas la posibilidad de una integración territorial, así como el reconocimiento político a la vocación estatal interna por parte de otros Estados. Ahora bien, Salinas propone adicionar un aspecto de mayor integración que recupere para tal concepto, la preocupación por fomentar la libertad, exten-

der la democracia y garantizar la justicia a nivel internacional.

Pero este esfuerzo reclama ahora una participación más decisiva de los diversos sectores sociales para que garanticen su pluralidad. De entre todos ellos resalta el papel de las fuerzas armadas, quienes han sobrepuesto su vocación institucional como la pauta nacional a seguir para consolidar tal esfuerzo.

Pese al definirse como una política exterior activa, Salinas infiere que ésta no posee ninguna aspiración de control geopolítico o expansionista. Más bien, la dinamización de la política exterior de México debe tender a crear las condiciones de competencia y desarrollo que facilite su inserción y modernización estructural interna: "Hoy la soberanía no sólo es la defensa de la integridad territorial. El ejercicio moderno de la soberanía implica también asegurar de manera efectiva y permanente la existencia política del Estado nacional frente a la competencia de los demás Estados, la vigencia del derecho de gentes, base de justicia y la seguridad entre nosotros".¹⁴

Visto de esta forma, la política exterior deberá ponerse al servicio de los cambios económicos que demanda el país, y disminuir sus controversias políticas con las hegemonías mundiales, pero sin que ello implique aceptar injerencias en sus decisiones políticas interiores. Esto es, renglón importante recibirán los proyectos de cooperación con la Comunidad Económica Europea y el Japón, en particular con todos los proyectos que se encuentren vinculados a la Cuenca del Pacífico, ello sin descuidar y reducir las tensiones políticas y relaciones

¹⁴ Carlos Salinas de Gortari. "Los retos del mundo contemporáneo exigen una política exterior activa y de principios". Cuatro Ciénegas, Coah. 9 febrero 1988. México. PRI. p. 6.

comerciales con los Estados Unidos, para así lograr soluciones justas sobre problemas compartidos tales como: acortar las asimetrías de desarrollo para así complejizar sus aparatos productivos; resolver la situación de los indocumentados, el tráfico de drogas y perspectivas de solución a la deuda externa y el proteccionismo comercial.

Sin embargo, el discurso salinista no desconoce que un factor de corto plazo que puede amenazar a la seguridad nacional territorial lo constituye el conflicto centroamericano, frente al cual conviene hallar soluciones en la misma dirección de diagnóstico que se observa para países en vías de desarrollo como el nuestro: en este caso, dar estímulos a la transición democrática concertada, así como propiciar su integración productiva con el resto de Latinoamérica. A ello deberá ir aparejado un mayor esfuerzo internacional por promover la distensión y el desarme dialogado entre los bolques Este-Oeste, además de encontrar mayores lazos de cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, a través de iniciativas como los Grupos de los Seis o de los Ocho, respectivamente.

Quizá un escenario nuevo dentro de esta presentación del discurso salinista lo sea el aspecto relativo a una mayor cooperación que pretendería establecerse entre el Ejecutivo y el Senado de la República, en la consulta y resolución en asuntos de política exterior, así como la de abrir canales de comunicación con expertos y organismos especializados que permitan un pulso más exacto de la receptividad social sobre tales empresas políticas.

En resumen, la política exterior retiene como su principal parámetro la conservación y extensión de la soberanía, aunque en el corto plazo representa una ecuación de difícil respuesta en tanto que la propuesta política de Salinas en materia económica

implica romper con bases ideológicas fuertes que asocian nuestra vocación nacional a conductas de férreo rechazo a los privilegios extranjerizantes y a los intervencionismos imperialistas. Así, el concepto de modernidad y cambio en el campo exterior presenta muy serias dificultades de aceptación debido a que México se ha retraído en su papel negociador en Centroamérica; ha perdido contacto y capacidad de convocatoria en el plano internacional respecto a problemas como la deuda externa, la integración latinoamericana y la cooperación internacional no alineada, entre otros.

Así, aunque se hable de virajes benéficos para el país, la intensidad y nivel de tales cambios parecen rebasar con mucho, la actual capacidad administrativa y de convocatoria interna que pueda ser emitida desde el centro presidencial sobre esta materia, en tanto los términos y evolución de los mercados mundiales y el diálogo con las potencias económicas no parecen tener cambios significativos que pudieran arrojar esperanzas plausibles en tiempos relativamente cortos.

El reto de la democracia

Sin duda, las propuestas en torno a la democracia adquieren una importancia capital en el discurso de la modernidad en México. La democracia constituye una pieza vertebral en el conjunto de estrategias diseñadas para "asimilar" el cambio social, a partir de la definición de nuevos espacios de encuentro entre el Estado y la sociedad civil.

La democracia es, por una parte, eje conductor de la renovación económico-social pues en ella radica la posibilidad de participación y acción de los diversos actores sociales dentro del marco del diálogo y concertación de intereses. Por otra parte, la

democracia comprende el espacio de elaboración y producción de la voluntad política que rige la unidad del movimiento nacional, pero de una manera en que las directrices son susceptibles de recambio a partir de las exigencias producidas por la dinámica de las necesidades sociales.

Inserta en la instancia propiamente política, la democracia representa el lugar fundamental para la definición del rumbo social. Por ello la democracia da sentido a la práctica política. En esta perspectiva queda, a nuestro juicio, teóricamente incluido el planteamiento de Salinas de Gortari al hacer de la "política moderna", clave del impulso renovador que propone para la sociedad mexicana. Al respecto apunta:

- Política moderna... es la que reconoce que el tejido social mexicano ha cambiado; que están surgiendo nuevas formas de expresión, potencialidad, que es necesario respetar y alentar cuando realmente benefician al pueblo, a los obreros, campesinos y pequeños y medianos empresarios; que la sociedad está redefiniendo sus canales y órganos de representación y participación que, por encima de actos exclusivos de autoridad, el orden se logra mediante el respeto a la ley, la renegociación y el argumento. Los tiempos de la imposición de una voluntad única y del diálogo restringido a unos cuantos interlocutores son parte del pasado.¹⁵

En este párrafo resalta el reconocimiento de transformaciones importantes en la sociedad mexicana ante las cuales el sistema político, conformado

¹⁵ Salinas de Gortari, C. *Retos y Propuestas*. Temas de Divulgación. PRI-Comité Ejecutivo Nacional. México 1987. p. 12.

durante la segunda mitad de la década de los treinta, se ve seriamente comprometido. Las estructuras políticas constituidas, a saber, el corporativismo sectorial, el régimen presidencialista y de partido de Estado, la centralización política y las decisiones de corte paternal y autoritario, se presentan ahora ante una seria desarticulación al no poder responder con la eficacia y pertinencia que durante el despegue modernizador del país mostraron. Las nuevas realidades económicas y sociales exigen otros esquemas de acción y participación no sólo para mantener la vigencia del poder político instituido sino, sobre todo, para darle viabilidad al proyecto nacional. Esta preocupación queda, en cierta forma, expresada en los postulados del discurso salinista, al considerar que

- Si la política no moderniza sus acciones cotidianas, si no se adapta al cambio social, la gran transformación económica y cultural del país puede devenir en anarquía o represión. No propongo modernizar la esencia de la política. Lo que propongo es que la practiquemos con nuevos procedimientos. De otra manera no podemos transformar a México pacíficamente y de acuerdo a nuestros principios.¹⁶

El punto nodal, por lo tanto, respecto al reto de la democracia en México se hace referencia explícita a la relación del Estado con la sociedad. Sobre esta relación, la discusión entre las fuerzas políticas de la nación ha versado sobre el peso específico que el Estado debe tener respecto a la sociedad civil en las decisiones sobre el desarrollo nacional. Inmerso en este debate, Salinas de Gortari ha presentado su posición al decir:

¹⁶ *Ibid.* p. 13.

● No concibo el Estado como el antagonista de la sociedad civil, sino como la organización política de la propia sociedad. Por eso la democracia no es una victoria de la sociedad sobre el Estado; por eso la democratización del país no debilita al Estado ni tampoco supone que sea necesario un simple traspaso de poder a la sociedad civil, la cual, además, no es homogénea pues cuenta con intereses encontrados, enfrentados a veces, y con grupos minoritarios de presión. . . En política no existen vacíos de poder: al remover una fuerza otra toma su lugar. Por eso, una sociedad débil alienta al autoritarismo, al burocratismo, a la corrupción y a la ineficiencia, un Estado débil no es requisito de democracia, sino preludio de anarquía, de intromisión extranjera o de predominio de intereses oligárquicos.¹⁷

Salinas de Gortari reconoce, por ende, la necesidad de un Estado fuerte para conducir la renovación política bajo criterios democráticos. Esto supone una suerte de "razón de Estado" que se sabe a sí mismo protector y regulador de las desigualdades sociales, ante las cuales antepone la racionalidad como criterio de unidad, estabilidad y progreso.

Por otra parte, los instrumentos que se pretenden utilizar para hacer efectiva la renovación política quedan, sustancialmente, adscritos a un conjunto de reformas institucionales que pretenden actualizar al régimen político en términos de la ampliación de la participación de la sociedad civil en el Estado. Además, dicha actualización deberá

realizarse, a juicio de Salinas de Gortari, conforme al derecho, es decir, con base en la legalidad constitucional. Desde este ámbito de acción se propone avanzar en cuatro grandes áreas para profundizar la democracia, a saber: "la renovación institucional de nuestra vida política; la impartición de justicia y la seguridad ciudadana; la conservación de los mecanismos de participación y organización social y el ensanchamiento del campo de la información y la cultura".¹⁸

Respecto a la primer área, se formula en el mismo discurso salinista, el respeto al sufragio libremente emitido, asumiendo la responsabilidad de respetar las decisiones del electorado y de fortalecer el régimen de partidos en el marco de la legalidad a fin de afianzar una "disputa civilizada por el poder y la formación de la representación política nacional".¹⁹ Igualmente, se plantea la consolidación del equilibrio de poderes con el propósito de inducir una mayor responsabilidad social en cada uno de ellos. La preocupación central en este aspecto es la conformación de un Congreso fuerte, no como "preludio de un régimen parlamentario, para el cual en nuestro país no existe ni razón histórica ni posibilidad de eficacia política o sustenta en el régimen de partidos. . ."²⁰ Antes bien, el Congreso debe fortalecerse para hacer efectiva su injerencia en la planeación del desarrollo y en el seguimiento de las acciones de la Administración Pública y el gobierno.

En el mismo ámbito de acción se subraya la necesidad de fortalecer el poder ejecutivo, a fin de mantener el ". . . firme control de la Adminis-

¹⁷ Salinas de Gortari, C. El reto de la democracia. *Discursos de Campaña* (Reunión de síntesis sobre "democracia y descentralización"), Puebla, Pue. 22 de abril de 1988. p. 11.

¹⁸ *Ibid.* p. 13.

¹⁹ *Ibid.* p. 17.

²⁰ *Ibid.* p. 15.

tración Pública. . . y la Capacidad de arbitrar intereses en pugna; superar conflictos, coordinar, negociar y concertar . . . lo que lo convierte en la instancia fundamental de decisión. . .”²¹ Finalmente, con relación al poder judicial se intentará consolidar el juicio de amparo, para sujetar el poder al derecho “ . . . a través del control de la constitucionalidad de los actos de autoridad por el Poder Judicial”.²²

Sobre la segunda área de incidencia, el discurso de Salinas de Gortari apunta la necesidad de “explorar mecanismos de control y vigilancia ciudadana que supervisen tanto la impartición como la procuración de justicia”. Con ello se pretende conformar una nueva lógica de relación entre el ciudadano y la ley, en la que los espacios de actuación son, de un lado, el mejoramiento de la eficiencia judicial y, de otro, la apertura de canales que permitan la propuesta ciudadana ante los abusos de autoridad y su participación efectiva para favorecer la seguridad pública.

En el plano de los mecanismos de participación y organización social, queda establecido que, paralelamente al fortalecimiento de las formaciones políticas partidarias, se inauguren espacios de participación, interlocución y decisión en los asuntos públicos de las agrupaciones sociales de la comunidad. También se plantea el fortalecimiento de los mecanismos de concertación y representación democrática, utilizando como instrumentos “el referéndum y la iniciativa popular”. Sin embargo, habrán de precisarse las “áreas, materias e instrumentos para evitar que cada asunto se convierta en una cuestión límite o en disputa de principios que en

nada favorece la marcha de la democracia y sí paraliza la acción del gobierno. . .”²³ En la misma línea de argumentación se apunta que las nuevas organizaciones y agrupamientos deberán fortalecer sus dirigencias y representantes a fin de que el Estado encuentre “interlocutores válidos, capaces de representar realmente los intereses de sus agremiados y tengan eficaz comunicación con ellos”.²⁴

Dentro del mismo ámbito de acción, la descentralización de la actividad pública jugará un papel importante, toda vez que a través de ella podrá distribuirse mejor la administración y el gobierno atendiendo en forma más eficaz las necesidades locales y regionales del país.

Por último, en lo concerniente a la información y la cultura, la propuesta de Salinas de Gortari versa sobre la necesidad de crear consenso y orientar la actividad del gobierno mediante la consolidación de una sociedad verazmente informada. Para el efecto, se requiere del respeto irrestricto de la libertad de expresión y el establecimiento de vínculos más estrechos entre el gobierno, los medios de comunicación social y la ciudadanía. Vencer la “subcultura del rumor, la desconfianza o la incredulidad” será el reto fundamental para consolidar la renovación nacional, fomentando “. . . una nueva cultura política en el ciudadano [para convencerlo] con hechos de la importancia que tienen sus acciones y sus decisiones políticas”.²⁵

En suma, el reto de la democracia, tal como se presenta en el discurso de Salinas de Gortari, supone a nuestro juicio, cuatro soportes ideológicos políticos fundamentales.

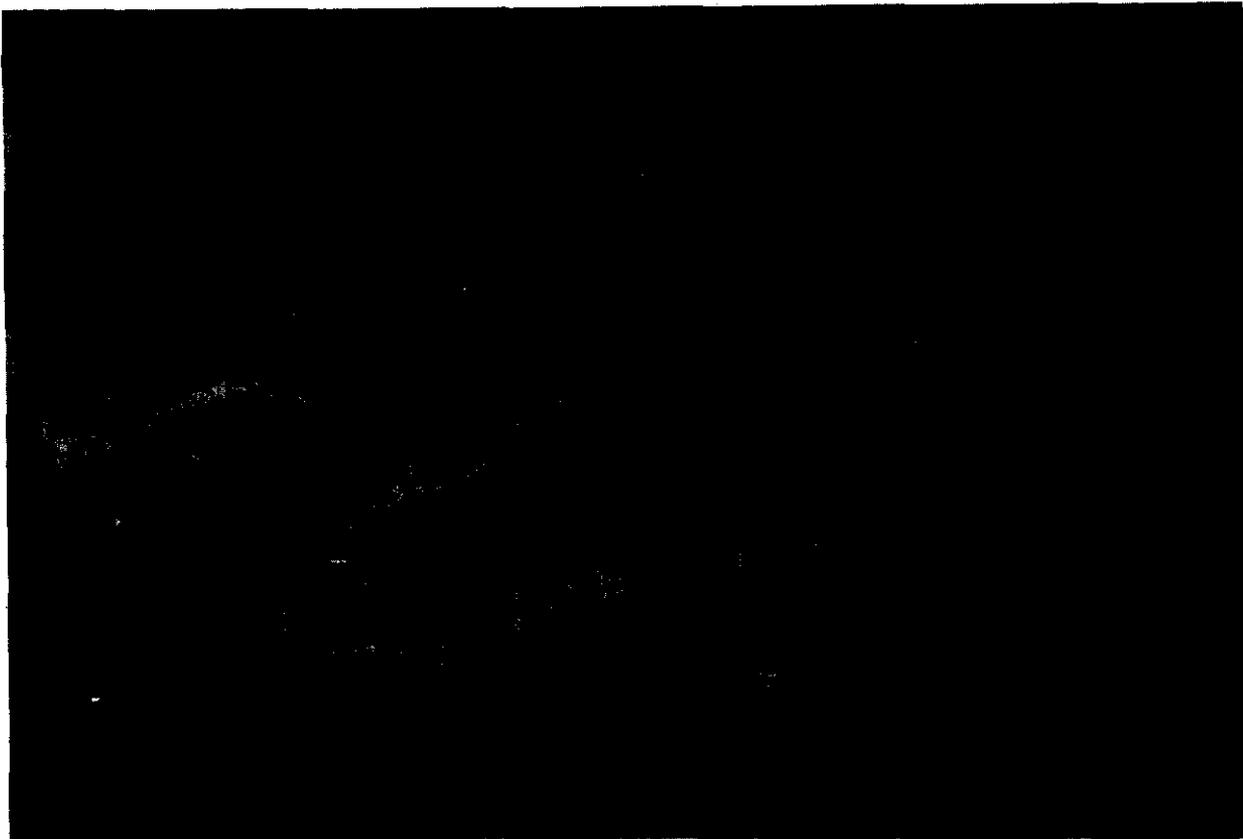
²¹ *Ibid.* p. 16.

²² *Ibid.* p. 21.

²³ *Ibid.* p. 21.

²⁴ *Ibid.* p. 21.

²⁵ *Ibid.* p. 22.



Protesta de la oposición en el Colegio Electoral. Foto: Ireri de la Peña

● El reconocimiento de cambios sustantivos en la sociedad civil mexicana ante los cuales el régimen político *constituido* muestra serias limitaciones. No obstante, se reconoce la vitalidad del mismo para “readecuarse” a las nuevas circunstancias, con lo que implícitamente se asume la capacidad de dirección política del PRI y el gobierno para efectuar las “reformas democráticas” necesarias para seguir dirigen-

do a la sociedad mediante derroteros que impliquen el cambio gradual y controlado.

● Al asumir la capacidad de autotransformación del régimen, la propuesta salinista, si bien formula la necesidad de apertura de las instituciones políticas, sigue considerando a la institución presidencial como el eje conductor básico en el que, en última instancia, seguirán

decidiéndose las acciones fundamentales del país.

• Frente a los proyectos alternativos para la transformación del régimen político, Salinas de Gortari asume una actitud descalificadora al considerarlas posiciones extremas y políticamente inviables. En contra de las "reformas reaccionarias" y "neopopulistas", antepone un proyecto moderado de reformas que a su juicio, evitarán la confrontación social y revitalizarán los "consensos" fundamentales de la sociedad a partir del fortalecimiento de las libertades, la participación política y el bienestar social.

Finalmente, existe la convicción de una necesaria modernización del PRI que, partiendo de una reforma interna, logre rearticular y renovar las alianzas sociales y políticas a fin de reinsertar al partido en un nuevo esquema de participación para reactivar su capacidad hegemónica en el marco de una nueva diversidad social y pluralidad política.

Así es como en el discurso de la democracia quedan formulados los principios básicos de acción del partido en el poder para emprender la renovación política. Habrá que evaluarlos a la luz de los resultados electorales donde la oposición (descalificada por Salinas) logró triunfos significativos. La realidad postelectoral trajo consigo ya realidades previstas y, más aún, está catalizando las propuestas de modernización política, que habrán de probarse en lo inmediato. Hoy, las fuerzas políticas plenamente vigentes en el país tienen ante sí la posibilidad de reestructurar racionalmente la práctica política de la nación. No obstante, la presencia de una realidad tan prontamente establecida, que

por demás significó un salto cualitativo de la oposición (no por concesión del Estado), supone también la emergencia de riesgos y desajustes con probabilidad de desembocar en actos de fuerza a los cuales podrán corresponder impredecibles costos sociales.

El "quiebre" de las fuerzas instituidas y la inserción real en aparatos de poder de fuerzas alternativas dibujan los contornos de un nuevo espacio de conflicto y concertación que, en el corto plazo, habrán de determinar los nuevos rumbos del desarrollo nacional, en los cuales se decidirán los problemas fundamentales de la economía, la sociedad y la política en México.

El reto social

El despegue industrial de México a partir de la década de los cincuenta, expresó avances importantes en el mejoramiento de las condiciones de vida del grueso de la población. El crecimiento del empleo y del salario, el incremento de los centros educativos y de asistencia social, la vivienda y el transporte público fueron entre otros, los aspectos que mostraron avances significativos del desarrollo social. No obstante, los efectos del crecimiento económico mostraron, asimismo, zonas profundas de desigualdad tanto a nivel espacial como a nivel de los diferentes grupos sociales. La centralización económica derivó en el rezago de importantes regiones del país como en la marginación social de importantes sectores de la población.

La política social del Estado, empero, pudo actuar con relativa eficacia puesto que implantó mecanismos de compensación de la desigualdad y la redistribución del ingreso. Mediante un vigoroso incremento del gasto social, el Estado mexicano fue capaz de atenuar los efectos excluyentes del

desarrollo con lo que también contribuyó, en buena medida, al mantenimiento de la estabilidad política.

Pero al iniciarse la década de los ochenta, el país entró en el más grande colapso económico de su historia moderna, produciéndose una recesión productiva sin precedentes a la par de un crecimiento hiperinflacionario. Asimismo, el Estado mexicano se vio envuelto en una profunda crisis fiscal que poco a poco fue minando su eficacia intervencionista, reguladora y redistributiva en la sociedad. Las respuestas planteadas al desequilibrio económico fueron de orden recesivo, fundamentadas en el recorte estricto de las actividades y, por ende, de los gastos del Estado. Su efecto inmediato fue una importante inflexión de la política de beneficio social en adelante subordinada al *realismo económico* que, aun propiciando el equilibrio de las finanzas públicas, significó el crecimiento de la desigualdad y una sensible caída de los niveles de vida de buena parte de la población.

En esa situación recesiva y de importantes costos sociales, el discurso de la modernidad ha planteado el reto social como el más “agudo y difícil”. Recuperando el esquema del realismo económico se ha enfatizado, no obstante, la necesidad de establecer políticas claras para incidir sobre la justicia social. Con ello, se hacen depender las posibilidades de ampliación de los programas sociales de la capacidad de reactivación económica de la nación. Al respecto, Salinas de Gortari ha planteado explícitamente que “. . . la política social [que propone] arranca de la estabilidad económica, de la recuperación del crecimiento y de la prosperidad gradual de las fuerzas productivas . . . [Por tanto]. . . crecimiento del empleo con estabilidad de precios y con recuperación salarial constituirá el marco

general de la política social en los próximos años”²⁶

Es desde este planteamiento de base que el discurso de la modernidad salinista pretende atender las necesidades sociales de una población creciente, inserta en una red de evidentes contrastes y desigualdades. El reto social, por tanto, en los tiempos actuales implica, por un lado, actualizar el precepto constitucional de justicia y, por otro, prever los efectos sociales de la modernidad. “No sólo enfrentamos lo incompleto —apunta Salinas de Gortari—, lo insuficiente, lo desviado. También debemos anticipar los efectos de nuestro desarrollo. La modernidad y la dinámica social misma dan origen a nuevas necesidades y demandas en condiciones que dificultan enfrentar con plenitud su cobertura. . .”²⁷

Para enfrentar las implicaciones actuales del reto social, resulta de capital importancia la acción del Estado, del cual se exige un funcionamiento eficiente en su intervención económico-financiera a partir de la cual sea posible obtener mayores recursos para orientarlos hacia la satisfacción de las demandas sociales. La eficacia social del Estado, sustentada en un realismo económico, debe, propiamente, moverse en un nuevo contexto de coparticipación con la sociedad, regido por la definición de “políticas claras” y objetivos específicos.

La política social propuesta por Salinas de Gortari rechaza “las tentaciones neopopulistas de la igualación desde arriba” lo mismo que los planteamientos del “mercado como igualador social automático”. Su propuesta implica más bien un compromiso efectivo del Estado para satisfacer

²⁶ Salinas de Gortari, Carlos. “Indignación ante la justicia”. Discurso pronunciado en la reunión sobre el “reto social”, celebrada en el auditorio del sindicato de trabajadores de Olimpia Mexicana en Chalco, Estado de México, 12 de mayo de 1988.

²⁷ *Ibid.*

los requerimientos básicos de la población mayoritaria, pero en un contexto de corresponsabilidad social y de respaldo efectivo del crecimiento económico.

Los ámbitos fundamentales de acción para cumplir con el reto social son: la modernización educativa, la reestructuración de la red de servicios básicos, el mejoramiento de la vida urbana y el fortalecimiento de la seguridad pública para los ciudadanos.

En torno a la modernización educativa se plantea, sustancialmente, fortalecer la cobertura y elevar la calidad de la enseñanza a fin de lograr, por un lado, una redistribución del ingreso por la vía educativa y, por otro, afianzar el proyecto reactivador de la economía en el contexto de las transformaciones mundiales. Una educación masiva de calidad exige, en opinión de Salinas de Gortari, ampliar el gasto educativo para "apoyar programas sólidamente sustentados"; disminuir disparidades educativas entre regiones geográficas y grupos sociales; orientar la labor educativa hacia el pluralismo cultural y la innovación científica y, de manera fundamental, prolongar la labor educativa hacia la sociedad. Los compromisos por cumplir se refieren, por su parte, a tópicos fundamentales: vencer el analfabetismo; mejorar la capacitación de los trabajadores a fin de incrementar sus ingresos, proporcionar educación básica a todos los mexicanos, reforzar el estudio de nuestro idioma, el civismo, las matemáticas, la historia y, centralmente, la geografía nacional. De igual forma, respecto a la educación superior y la investigación científica se destaca la necesidad de generar un esquema en el que las universidades atiendan las "percepciones plurales de valores y las necesidades actuales y futuras". La educación a nivel licenciatura y de posgrado



Presentación de boletas quemadas. Foto: Ireti de la Peña

debe, por su parte, adecuarse al contexto de cambio constante científico y tecnológico.

En relación con la reestructuración de la red de servicios básicos se desarrollarán estrategias en materia de abasto, salud, vivienda y agua potable. Respecto al abasto el punto fundamental es garantizar la oferta alimentaria atendiendo tanto la problemática rural como las cuestiones relacionadas con el consumo de los grupos de menores ingresos,

vía aplicación de subsidios diferenciados y la participación y organización comunitaria. En lo que a salud concierne se plantea avanzar en la construcción de un sistema nacional mediante “la consolidación de la descentralización de los servicios, aumentando la eficacia y equipamiento de su cobertura”. En relación con la vivienda el propósito es que, “al término del próximo sexenio, la demanda de la vivienda por reposición sea menor que la que hay actualmente después de haber cubierto la que se deriva del crecimiento de la población”. Para ello, habrá de diseñarse un nuevo programa de vivienda en el que encuentren participación “todos los sectores sociales” y donde se implanten nuevos esquemas de financiamiento, con especial atención a la vivienda en colonias populares. Por último, respecto a la disponibilidad y uso del agua habrán de promoverse una “cultura del agua como recurso vital” paralelamente a una revisión de sus costos y subsidios, el mejoramiento de las tecnologías para su uso en la industria, el medio rural y la infraestructura doméstica.

Para mejorar la vida urbana, Salinas de Gortari plantea enfrentar el problema de la migración rural-urbana evitando la “metropolización excesiva” e integrando, al mismo tiempo, localidades rurales dispersas. Por tanto, dentro de esa problemática un foco central de atención será el ámbito rural pues “atender y erradicar la miseria del campo” evitará “que se traslade a la ciudad”.

Finalmente, para garantizar “la seguridad ciudadana y el orden público” se prevé fortalecer el poder judicial, impulsar la administración de justicia y mejorar el control sobre la transparencia y oportunidad de la acción pública. Igualmente, el combate a la delincuencia ocupará un lugar central, a través del fortalecimiento de los “órganos de coer-

ción” y el mejoramiento de la eficacia de su personal no sólo en términos de su reclutamiento y formación sino también en el plano de su control, sujetando a los “cuerpos públicos a estrictas responsabilidades legales”.

La política social perfilada en el discurso salinista resulta novedosa en varios puntos. Pero de ellos, vale destacar el concerniente a la nueva connotación con que se asume la satisfacción de las necesidades sociales, toda vez que en ella se sintetiza, a nuestro juicio, la perspectiva global de la política social en el presente contexto de desarticulación económica y social —y ahora también política— de la nación.

En la propuesta salinista el concepto de “mínimos de bienestar” se transforma en el de “máximos de atención”. Con ello se pretende trasladar el realismo económico y político al plano de la práctica estatal de beneficio social. Aunque el cambio connotativo se justifica en términos de la posibilidad de establecer “. . . un programa enérgico de combate a [la] miseria extrema”, en realidad involucra una propuesta “eficientista” de la acción del Estado a partir de la distribución de los “costos sociales” de la actividad económica a los diversos sectores de la sociedad civil. Al respecto, Salinas de Gortari ha apuntado: “Lograr que el Estado proporcione en su medida y mediante la concertación social de los servicios constitucionalmente fundados, exige una actitud distinta ante las nuevas formas de organización de ciudadanos, grupos y sectores; sólo así brotarán en todo el país esfuerzos sociales para elevar el bienestar alrededor de los ejes de perjuicios sociales en materia de salud, de educación, de vivienda, de distribución y abasto y de medio ambiente”.²⁸

²⁸ *Ibid.*

El riesgo de esta propuesta no radica en su convocatoria social sino en la evidente diferencia económico-social, política y cultural en que los diferentes grupos sociales se encuentran en los momentos actuales, lo cual puede implicar ciertamente un desplazamiento de la "absoluta responsabilidad social del Estado", pero probablemente efectuada con otros criterios ante los cuales, los pretendidos "máximos de atención" pueden sufrir importantes desviaciones.

El hecho fundamental es, creemos, reconocer puntualmente las realidades económico-sociales del presente a fin de identificar claramente la sociedad civil corresponsable y los ámbitos susceptibles de su incidencia. De la precisión de los nuevos contenidos sociales y de los actores que promoverán su ejecución dependerán, a nuestro juicio, los adjetivos de la modernidad.

El reto económico

El discurso electoral de Salinas de Gortari revela la vocación y la convicción de que en los últimos años se ha seguido una ruta de cambio que, aunque costosa en términos de bienestar social, pretende haber creado las condiciones necesarias para derivar en las oportunidades de despegue y crecimiento armónico que fueron dilapidadas inconscientemente durante los años setenta. También parece convencido de que tales modificaciones estructurales permitirán al país, sin merma de su soberanía política, establecer una competitividad e interdependencia con el exterior, beneficiándonos de sus avances tecnológicos y propiciando así las transformaciones redistributivas en el ingreso y en los salarios de los trabajadores, así como descargando al Estado de muchos de sus compromisos sociales, para redimensionar así las

áreas de atención en que históricamente ha participado, tales como construcción de infraestructura industrial, comunicaciones y transportes, vivienda, educación y salud. En estas circunstancias, el reto económico que identifica Salinas es fortalecer a esta política económica como el principal detonante de los cambios que requiere el país.

¿Cuál es el contexto problemático y cuáles las soluciones aportadas por Salinas? Frente a los crecientes déficits público y comercial, que combinados con la crisis de la deuda han maniatado la capacidad de crecimiento y desarrollo, Salinas propone que en los años noventa: "varios serán los motores del crecimiento sostenido: la inversión privada, las exportaciones no petroleras, la inversión pública en infraestructura y la expansión del mercado interno"²⁹ Por otra parte, Salinas identifica que para poder afrontar adecuadamente los incrementos de manejo sobre los flujos financieros, deberán crearse bases de erradicación respecto a problemas tan graves como la inflación, la especulación cambiaria y propiciar el regreso de capitales mediante la oferta de tasas impositivas y de rendimiento más flexibles y atractivas, sin detrimento para las propias finanzas del Estado. Sólo de esta forma, habrá un contexto creíble dentro de la economía, hacia una rectoría del Estado que esté en capacidad de coordinar, junto con las fuerzas sociales, estrategias de planificación a largo plazo.

Salinas, sin embargo, pretende ser enfático en el aspecto de que redimensionar las atribuciones rectoras del Estado no significa en modo alguno, ceder ante presiones privatizadoras. La propuesta

²⁹ Salinas de Gortari Carlos. "El reto económico, fortaleza de la Nación y Bienestar de los mexicanos". San Pedro Garza García, N. L. 19 de mayo de 1988, en *Tiempo*, núm. 2403 p. V.

salinista apela a una complementación equilibrada entre inversión pública y privada, para atender también bajo este principio, las necesidades de los mercados interno y externo, a ritmos que superen a la capacidad de crecimiento demográfico, en un intento por recuperar control sobre la demanda y estructura del empleo que se potenciará en los próximos años.

El crecimiento económico y el equilibrio comprometido entre las partes debe además, armonizar con la dinámica de precios y salarios; en este sentido, la propuesta salinista también desea ser clara respecto a precisar su compromiso con el llamado sector social de la economía: "Jamás nos hemos planteado que el Estado prescinda de su función de contribuir al desarrollo social. Siempre hemos afirmado un Estado al servicio de las mayorías".³⁰

En este sentido, como nunca se había observado en sexenios anteriores, la propuesta del discurso político priísta, en boca de Salinas, define como prioridad y en términos muy claros, reconstituir y fortalecer una alianza estratégica con los empresarios, a la vez que solicita a los núcleos sindicales redimensionar y cambiar espacios políticos por ventajas económicas futuras: "La participación de los trabajadores en la modernización exige diálogo sobre los cambios inevitables en sus fuentes de empleo, capacitación para las nuevas tecnologías y sentido de servicio, a cambio de mejorías de sus salarios reales, mayores oportunidades de avance, más empleos y elevación de su bienestar".³¹

En este sentido, Salinas no prioriza nítidas preferencias respecto a las características de procedencia del capital que se instale en el país. No

se trata de establecer un sistema de eficiencia o uno de justicia. La eficiencia la pondrá el capital y los trabajadores, la justicia seguirá en manos del Estado. Esto implica una precisión clara: El Estado moderniza sus mecanismos de poder, pero no suprime su vocación de ejercerlo.

Esto es en síntesis, una perspectiva panorámica de la oferta de renovación económico-estructural del proyecto salinista de gobierno, que como puede observarse, concentra sus líneas de acción en el financiamiento al desarrollo, el cambio estructural productivo, la profundización y ampliación de infraestructura y la modernización industrial y agropecuaria.

Consideraciones finales

A lo largo de las presentes notas, se ha pretendido esbozar un marco de reflexión sobre las características modernas y de cambio que han sido empleadas dentro del discurso político del candidato presidencial Carlos Salinas de Gortari. Su núcleo, identificado en los cuatro discursos o retos, indican una posición que vale la pena destacar, definen un proyecto que no comenzó a partir de tales discursos, sino que ya estuvieron presentes desde la comparecencia que Salinas de Gortari hiciera como precandidato ante la dirigencia priísta en agosto de 1987. En esa ocasión, los retos en tanto paradigma de lo que vendría a consolidarse en una primera noción de política moderna se sintetizaron de la siguiente forma: "La sociedad quiere una modernización en la que participe activamente, basada en la unidad y en el consenso, no un mero afán de cambio que rompa con la tradición, pase

³⁰ Salinas de Gortari, Carlos. *Ibid.*, p. XII.

³¹ Salinas de Gortari, Carlos. *Ibid.*, p. XIV.

por encima de las instituciones y exacerbe los antagonismos".³²

El reto central que ha venido afrontando Carlos Salinas de Gortari es múltiple en tanto que su discurso político revela fallas iniciales que lo han colocado ante obstáculos ciertamente espinosos: a) encara el desgaste acumulativo de credibilidad que los sectores sociales poseen hacia un régimen político presidencialista, cuyas decisiones no han respetado durante los últimos años, las vocaciones electorales y descentralizadoras que han sido promovidas por la ciudadanía en diversas entidades del país; b) llegó a una contienda política en donde el PRI ha sufrido los peores desgajamientos en su militancia interna, producto de la imposibilidad de discutir internamente los fundamentos programáticos de las estrategias de gobierno, así como de procedimientos relativos a la elección del propio candidato presidencial; c) como consecuencia de los dos puntos anteriores, la línea del discurso político de Salinas, si bien apela a encauzar al país hacia una etapa de modernización y cambio social que compense al enorme desgaste económico y moral al que ha sido sometido México durante esta década, las prácticas que lo vienen impulsando siguen basadas en el autoritarismo y un discurso mayoritario que sólo a fuerza de los resultados electorales obtenidos en julio, parecen liberarlo de sus compromisos con los grupos más retrógrados, pero sin que esto se constituya en signo alguno de una apertura definitiva hacia un Estado de partidos y a un régimen presidencial más restringido en términos políticos.

³² Salinas de Gortari, Carlos. Discurso en la "Revisión de consulta sobre los problemas nacionales y la plataforma electoral básica del PRI", en *La Jornada*, 28 de agosto 1987, p. 21.

Bajo tal circunstancia, como ya se ha definido en estas páginas, el esclarecimiento político-modernizador significa propiciar una renovación en los procedimientos, mas no en la esencia del sistema político. Se desea mejorar el poder conservando al poder mismo. En ello queda precisado, por ejemplo, en su discurso de aceptación como candidato del PRI: "El término 'moderno' no se aplica a los fines, sino a los procedimientos de la política; es decir, a la manera de hacer política".³³

Ahora bien, ¿cuáles son esos límites que parecen entorpecer la consolidación de los diversos ofrecimientos realizados dentro de los discursos que se han recuperado hasta aquí? En primer lugar, en el rubro de la soberanía, se ha expresado nuestro escepticismo con referencia a que la futura administración salinista, en caso de instaurarse, pueda manejar una política exterior que mantenga como prioridad la reconversión de los términos de cooperación e inserción productiva frente a los capitales extranjeros, sin que ello implique influencias perniciosas en la conducción política interna. Esto sería un precio demasiado alto si el propósito fuera reducir las tensiones directas con Estados Unidos, así como la de apostar las oportunidades externas nacionales a proyectos como la Cuenca del Pacífico o los corredores industriales basados en manufacturas de maquila con inversión transnacional mayoritaria.

Respecto al reto de la democracia, poco podrá hacerse en caso de que no sean respetados los nuevos espacios de participación que legal y legítimamente ha ganado la oposición; en tanto la

³³ Salinas de Gortari, Carlos. "Discurso de protesta como candidato del PRI a la Presidencia de la República", 8 noviembre 1987, en *Discursos de Campaña*, tomo 1, México, PRI 1988, p. 11.

modernización del aparato gobernante no tenga como ejemplo una renovación en los métodos internos de funcionamiento del PRI y las organizaciones corporativas. En síntesis, poco habrá de hablarse de modernidad si el principio del centralismo presidencial y burocrático no le da paso y vigencia a los principios de equilibrio y autonomía con las otras instancias del poder federal, si no hay indicios de proseguir el objetivo del cambio: "Después de un muy largo periodo de excepcional creatividad está finalizando el efecto de las grandes reformas realizadas hace 50 años, que crearon las bases sociales que han sustentado nuestro quehacer político, tenemos entonces que plantearnos con seriedad y con gran responsabilidad la necesaria readecuación de nuestros esquemas de convivencia política mediante reformas democráticas y progresistas a nuestras instituciones".³⁴

En síntesis, los riesgos de la democracia también deberán emplazar al Estado a una reconsideración que haga ver a Salinas y a su equipo, el carácter todavía prematuro e inadecuado que mantienen sus intereses por transformar uno de los pocos bastiones históricos que aún le quedan al sistema, en lo relativo a su política social y económica. En lo social, en tanto que su fórmula de que se pasará de "mínimos de bienestar a máximos de atención", revela la intencionalidad de restringir la presencia del Estado en forma global, frente a sus obligaciones constitucionales de ofrecer servicios de salud, vivienda, educación, salvo en espacios de poblaciones marginadas. De la misma manera, la consecución hasta sus últimas consecuencias, de retirar al Estado de la producción de bienes y servicios que se consi-

deren ineficientes o excesivos para los objetivos del Estado, acrecienta las dificultades de dar una rápida solución a los cambios en la estructura productiva; la generación de empleos, así como a las posibilidades de fomentar la cooperación tripartita entre capital, gobierno y trabajadores. Sin embargo, la ruta trazada antes y después de los comicios, parece indicar la irreversibilidad y en algunos casos, la intransigencia del aparato gobernante para redefinir sobre la marcha, los términos del proyecto con la oposición partidaria, y mucho menos aún, con organizaciones y grupos sociales que también se han añadido a este proceso de transición y cambio. Ello también nos obliga, aunque aquí sólo esgrimamos una pequeña reflexión, que el papel de los medios de comunicación será de vital importancia para la dinámica que sea observada por las mismas fuerzas sociales, en pos de la democracia y la estabilidad económica.

En términos generales, además de una pretensión de mantener un férreo control hegemónico sobre los medios de información, el principal objetivo del discurso político de Salinas de Gortari fue el abordar una reconstrucción comunicativa con los espacios que conforman a la opinión pública. Esta problemática percibió entonces que la sociedad civil ha podido incrementar al margen —y configurar por encima del gobierno—, toda una red de mecanismos que le permitieron aceptar o rechazar patrones de comportamiento que pretendieron ser introducidos, bajo fórmulas de abrumadora consulta y divulgación de sus actividades y alocuciones.

La opinión pública fue en este sentido, el interlocutor genérico que el PRI enfrentó bajo circunstancias de notoria desventaja histórica, tanto por la naturaleza del discurso político que fue empleado, así como por el aceleramiento de formas alternati-

³⁴ Salinas de Gortari, Carlos. "El reto de la democracia", 22 abril 1988. Puebla, Pue. México, PRI, p. 6.

vas que redujeron las posibilidades de aceptación y reproducción de las ofertas ideológicas dentro de un electorado, que si bien manifestó su vocación hacia el cambio estructural y la democracia moderna, no lo hizo desde las instancias tradicionales, sino mediante la promoción de nuevos actores y prácticas sociales que ya nada tengan que ver con la hegemonía priísta ni tecnocrática.

En tales circunstancias, lo que se ha presenciado y lo que se ha admitido por el propio aparato gobernante, es la consolidación de un conjunto heterogéneo de grupos que apuestan, desde diversas trincheras ideológicas, a dirigir a una sociedad que efectivamente demanda soberanía, democracia, justicia social y modernización económica. El diferendo sustancial es que el discurso salinista sólo ha podido apreciar ciertos elementos de superficie, pero dista mucho en capturar y resaltar hacia esa misma opinión pública, los compromisos específicos que tanto su programa de gobierno, así como de cuáles serán los espacios concretos en donde

podrá hablarse de diálogo con las oposiciones, se comenzarán en articular en el corto plazo.

Una opinión pública ha surgido como saldo positivo de este proceso, en tanto polariza y define a las fuerzas políticas en pugna. El Estado mexicano, deberá conservar y ampliar los foros de discusión periodística para establecer más y mejores polémicas partidistas y de interpelación de la propia sociedad hacia los actos de gobierno; también deberá abrirse de capa a las estaciones radiofónicas y televisivas, tanto privadas como gubernamentales como el resultado palpable de que se respetará al nuevo mosaico que compone a la cultura política nacional. En síntesis, el discurso político tendrá que fortalecer contenidos para términos como mayorías y minorías, participación y representación, legalidad y legitimidad; un discurso político en donde también el aparato de gobierno perciba que no perderá capacidad de conducción, pero que tampoco podrá ser ya el único portavoz decisional respecto a los destinos democráticos de la Nación. 🖊️